



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 244 -2023-AMPI

ICA, 24 MAR 2023

VISTO: El Informe Legal N° 740-2022-AL-LMJC-SGRRHH-GA-MPI, de fecha 07 de noviembre del 2022, la Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022, el Informe Legal N° 90-2023-GAJ-MPI y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Legal N° 740-2022-AL-LMJC-SGRRHH-GA-MPI, de fecha 07 de noviembre del 2022, concluyen que se declare IMPROCEDENTE lo solicitado por Victoria Salcedo Gonzales.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022, se resuelve declarar IMPROCEDENTE lo solicitado por Victoria Salcedo Gonzales.

Sobre la apelación presentado por la administrada,

Interpone apelación contra la Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022, se resuelve declarar declare IMPROCEDENTE lo solicitado por Victoria Salcedo Gonzales, solicitando la nulidad total de la aludida.

La apelante refiere haber ingresado a laborar a la Municipalidad Provincial de Ica, mediante contrato de locación de Servicio desde el 01 de enero del 2019 y que a la fecha teniendo más de 3 años y 10 meses de relación laboral de manera ininterrumpida.

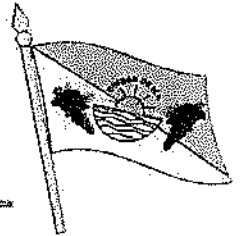
Asimismo, invoca la Ley N° 24041 para que se le reconozca su derecho como es la de la protección que brinda la citada ley, por estar laborando como locadora de servicios desde el 01 de enero del 2019 hasta fecha y que a la actualidad suman más de 3 años y 10 meses de relación laboral con la Municipalidad Provincial de Ica de manera ininterrumpida, así como también ha venido realizando sus labores que desempeñaba en la función de apoyo administrativo en el área de tesorería de la municipalidad Provincial de Ica, desde el 01 de enero del años 2010 como trabajadora CAS.

Que, la aludida resulta nula por motivar una Resolución de Gerencia de manera inadecuada, incongruente y temeraria, con respecto a las normas y leyes vigentes en nuestro ordenamiento jurídico peruano, al señalar que la ley N° 24041 fue derogada, asimismo, refiere que supuestamente lo solicitado era el





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



de reconocer un record laboral de más de 12 años de servicio laborales en la Municipalidad de Ica, por lo que, en su petitorio no ha mencionado ningún reconocimiento de record laboral.

ANÁLISIS DEL CASO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305 — Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 —Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que radica en ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

El artículo 20° en su numeral 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribución del Alcalde el de dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas; del mismo modo el artículo 43° del mencionado cuerpo normativo menciona que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

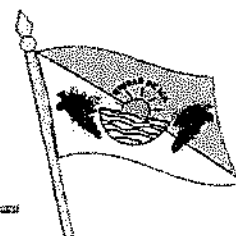
El numeral 33) del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que *"son atribuciones del alcalde: 33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad"*.

Es finalidad fundamental de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

El Texto Único Ordenado, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su Artículo IV, del Título Preliminar, numeral 1.1 y 1.2, señala: 1.1. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 1.2. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, En un plazo razonable (...)"

Con respecto a su apelación

Ahora que, hemos delimitado el petitorio y la materia de pronunciamiento, conforme al expediente puesto a la vista, corresponde analizar la pretensión en función a los fundamentos que el administrado a vertido a su apelación.

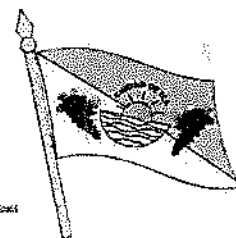
Ahora bien, mediante su recurso de apelación la administrada solicita que se declare la nulidad de Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022, la misma que declara improcedente su solicitud; asimismo, la apelante refiere haber ingresado a laborar a la Municipalidad Provincial de Ica, mediante contrato administrativo de servicio, desde el 01 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2018; asimismo, manifiesta que partir del 01 de enero del 2019 prestó servicios de **locación de Servicio** en el área de la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad de Ica, por el periodo de 3 años y 10 meses, solicitando se declare fundada su solicitud y se reconozca su derecho de protección bajo el amparo de la Ley N° 24041.

Que, el artículo 1764 del Código Civil, refiere que: "Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución". Es decir, de todo lo actuado en el presente caso, **se tiene que la relación de naturaleza civil que existe entre las partes, se ha llevado conforme a lo establecido por dicho dispositivo legal, que lo que ha existido es una prestación de servicios de un determinado tiempo sin haber existido SUBORDINACIÓN hacia la administradora y la cual efectivamente ya sido retribuida, para lo cual, la administradora giró recibos por honorarios a la entidad, todo ello de acuerdo con el contrato de Locación de Servicios que suscribieron las partes.** Pues, de ser el caso de una desnaturalización del contrato; es decir, de haber existido el revestimiento de una relación laboral originada por un contrato de trabajo, bajo la suscripción de aparentes contratos de locación de servicios, se encontrarían acreditados los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, esto es la prestación de servicios en forma personal, bajo subordinación, con un horario y una retribución económica; asimismo, el artículo 1361 del citado Código señala: "los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresa en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla".

Que, el contrato de Locación de Servicios, regula las prestaciones de servicios materiales e intelectuales, estableciéndose que el plazo máximo de dicho contrato es por seis (6) años (tratándose de servicios profesionales), y de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



tres (3) años (en caso de otra clase de servicio), de tal modo que los contratos suscritos bajo esta modalidad son de naturaleza civil; por ende, no son objeto de protección laboral.

Ahora bien, con respecto a la Ley N° 24041 en su artículo 1, efectivamente brinda una protección frente al despido incausado, aplicable para los servidores contratados para labores de naturaleza permanente y que tengan más de un (1) año ininterrumpidos de servicio sujetos al Régimen del Decreto Legislativo N° 276, los cuales, únicamente pueden ser cesados y destituidos previo procedimiento establecido en dicho decreto y por las causales establecidas en su capítulo V.

Que, al respecto, **SERVIR**, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, señaló que no tiene competencia sobre las relaciones de naturaleza civil que se den en la administración Pública; **sin embargo, se emitió pronunciamiento sobre el ingreso a la Administración Pública y aplicación de la Ley 24041, haciendo un análisis con respecto a los Locadores de Servicios, en su Informe N° 001-2019-SERVIR/GPGSC**, señalando en sus conclusiones: 3.1 Las personas que brindan servicio al estado como Locadores de Servicios, no están **SUBORDINADOS** al Estado, sino que prestan sus servicios bajo las reglas del Código Civil y sus normas complementarias cuya contratación se efectúa para realizar labores no **subordinadas**, de manera autónoma por un tiempo determinado a cambio de una retribución, sin que ello implique una vinculación y de reconocimiento de naturaleza laboral o estatutaria con el mismo. (...), 3.3 **La aplicación de la Ley 24041 es solo para los servidores contratados bajo en régimen del Decreto Legislativo N° 276, por lo que, dicha Ley no podría incluir a las personas que brinden servicios al Estado como Locadores de Servicios, ya que la naturaleza de su contratación es civil y no laboral.** (...). En este sentido, la norma deja claro, que la protección frente al despido incausado que brinda la Ley N° 24041, es únicamente aplicable a los servidores que se encuentra bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276.

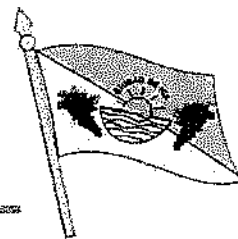
Asimismo, sobre la contratación bajo la modalidad de locación de servicios para labores de naturaleza permanente, en el punto 2.10 del Informe N° 458-2011—SERVIR/GG-OAJ, señaló lo siguiente:

- (...), en el contrato de locación de servicios la prestación de servicios se realiza de manera independiente, sin presencia de subordinación del contrato. Así lo ha expresado el **Tribunal Constitucional** en la sentencia recaída en el **EXPEDIENTE N° 04840-2007-PA/TC**¹.

¹ EXPEDIENTE N° 04840-2007-PA/TC



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



4.- Toda relación laboral se caracteriza por la existencia de tres elementos esenciales que la definen como tal: (i) prestación personal de servicio, (ii) subordinación y (iii) remuneración. En contraprestación a ello, el contrato de locación de servicio es definido por el artículo 1764 del Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual "el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, al prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución", de lo que se sigue que el elemento esencial del contrato de locación de servicios es de independencia del locador frente al comitente en la prestación de sus servicios.

(...).

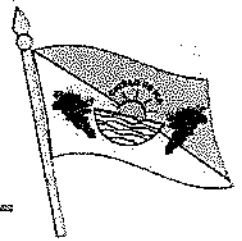
Que, en esa línea, la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público, aplicable a todas las personas que prestan servicios remunerados bajo subordinación para el Estado, establece en su artículo 5 que, "El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades"; en el presente caso no se cumple con el supuesto de hecho establecido en el citado artículo, toda vez que no ha habido concurso público de méritos;

Que, por su parte, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 276 establece como un requisito para el ingreso a la carrera Administrativa: "Presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión"; mientras que el artículo 28 del Reglamento dicha ley señala que "el ingreso a la Administración Pública en la condición de servidor de carrera o de servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente mediante concurso. La incorporación a la Carrera Administrativa será por el nivel inicial del grupo ocupacional al cual postuló. Es nulo todo acto administrativo que contravenga la presente disposición". A su vez, el artículo 32 del referido reglamento señala que: "El ganador del concurso de ingreso es incorporado a la Administración Pública mediante resolución de nombramiento o contrato, en la que además se expresa el respectivo puesto de trabajo". De modo tal que el ingreso a la administración pública bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, ya sea como servidor de carrera (nombrado) o servidor contratado por servicios personales para labores de naturaleza permanente (contrato), se produce siempre a través de concurso público. Aunque, en estricto, solo se encontrara dentro de la Carrera Administrativa el personal que haya ingresado a la administración pública con nombramiento; pues de acuerdo al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 276, los servidores contratados por servicios personales no están comprendidos en la





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Carrera Administrativa, pero sí en las disposiciones de la referida ley en lo que les sea aplicable;

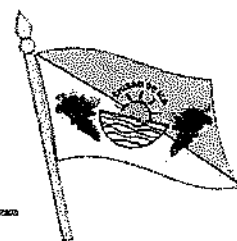
Que, igualmente, en la sentencia recaída en el expediente N° 05057-2013-PA/TC (Caso Huatuco Huatuco), el Tribunal Constitucional ha precisado que: "El Tribunal Constitucional ha puntualizado que los contenidos del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, son los siguientes: i) acceder o ingresar a la función pública; ii) ejercerla plenamente; iii) ascender en la función pública; y iv) condiciones iguales de acceso (**Expediente N.º 00025-2005-PU/TC y otro, FJ 43**). Asimismo, ha determinado que el derecho de acceso a la función pública tiene como principio consustancial el principio de mérito; el cual, vincula plenamente al Estado y a toda entidad pública en general. Esto significa que este principio vincula positivamente al legislador a que la regulación sobre el acceso a toda función pública observe irrestrictamente el principio basilar del acceso por mérito; asimismo, que toda actuación de la administración del Estado y de toda entidad pública, en general, observe tal principio en todos sus actos en relación al acceso a la función pública de las personas (**FJ 50**). Teniendo en cuenta lo expuesto acerca de los mencionados contenidos de relevancia constitucional sobre funcionarios y servidores públicos, específicamente que el aspecto relevante para identificar a un funcionario o servidor público es el desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado; a que la carrera administrativa constituye un bien jurídico constitucional; la prohibición de deformar el régimen específico de los funcionarios y servidores públicos; que el derecho de acceso a la función pública tiene como principio consustancial el principio de mérito; y que, conforme a sus competencias ya los mencionados contenidos constitucionales, el Poder Legislativo ha expedido la Ley N.º 28175, Marco del Empleo Público, en cuyo artículo 5º establece que el acceso al empleo público se realiza.

Mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y capacidad de las personas, el Tribunal Constitucional estima que existen suficientes y justificadas razones para asumir que el ingreso a la administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. En efecto, este Tribunal ha resaltado la importancia de la meritocracia (mérito personal y capacidad profesional) para el ingreso a la administración pública, estableciendo que esta constituye un criterio objetivo fundamental en el ingreso y permanencia en la actividad estatal para la prestación de un servicio público (**Expediente N.º 00020-2012- PI/TC FJ 56**).





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Respeto al silencio administrativo negativo presentado por la administrada

Con respecto al Silencio Administrativo Negativo interpuesto por la administrada, este tiene por efecto habilitarla para la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.

El Silencio Administrativo Negativo no inicia el computo de plazos ni términos para su impugnación, la norma no ha previsto plazo para interponer la demanda Contencioso Administrativa, en caso de producirse silencio administrativo negativo sin embargo se deberá de tomar como referencia la fecha en que se produjo el silencio administrativo negativo para computar el plazo perentorio que tuvo el administrado para impugnar judicialmente el acto administrativo.

En principio, acontecido el silencio administrativo negativo no se acoge la ficción legal que hay un acto administrativo en algún sentido, sino solo se entiende que se ha facultado al peticionario a acogerse a él y trasladar la competencia para resolverlo a otra instancia posterior. **Para acogerse al silencio, el administrado simplemente interpone el recurso administrativo** o la demanda contencioso-administrativa correspondiente sin necesidad de requerirsele, enviar a la autoridad instructora algún aviso previo de acogimiento. Por ello, es que la autoridad administrativa puede emitir decisión hasta que no sea notificada de la demanda judicial, o se haya interpuesto el recurso administrativo correspondiente. Si la emitiese luego de notificada la demanda, el pronunciamiento carecerá de eficacia. Pero si el acto expreso se produjese antes de la notificación de la demanda, el demandante podrá solicitar —según sea el contenido favorable o no a su pedido— o bien la conclusión del proceso o incorporarla como objeto del proceso.

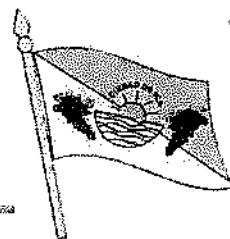
Ahora bien, el silencio Administrativo Negativo, es también una técnica legal que permite al ciudadano considerar denegada su petición a efectos de interponer el recurso administrativo o la demanda administrativa correspondiente. **O esperar a que la administración se pronuncie**; dado que, es un mecanismo que opera solo por decisión del particular; es decir, no lo obliga. Así lo ratifica la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que en la STC N°1003-98-AA/TC "Caso Alarcón Méndez".

- "(...), habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante, HA OPERADO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, por lo que el recurrente de acuerdo al artículo 188, numeral 188.3 de la Ley 27444, se encuentra **HABILITADO PARA INTERPONER LOS RECURSOS**

² Doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que en la STC N°1003-98-AA/TC "Caso Alarcón Méndez"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



ADMINISTRATIVOS Y LAS ACCIONES JUDICIALES PERTINENTES (...)³ (lo sombreado es nuestro)

Tiene, por consiguiente, una naturaleza potestativa, pues el particular puede esperar a que la administración se pronuncie o decidir impugnar la inactividad administrativa ante el superior, o ante el Poder Judicial "iniciar un proceso contencioso administrativa". En definitiva se busca proteger los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia.

Por consiguiente, el Tribunal Constitucional, es muy claro al diferenciar respecto a la activación del silencio administrativo negativo, ya que refiere que este opera con la simple inercia de la administración pública para resolver su pedido, por ende, a este solo se aplicaría el recurso de apelación a una resolución ficta ya que se entiende por denegado su petición; empero, se puede apreciar en el expediente puesto a la vista que la que obra la Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022, la misma que fue notificada el 09 de noviembre del año 2022, conforme lo menciona en su escrito de apelación de fecha 25 de noviembre del 2022, por consiguiente, dicho silencio administrativo no se podría aplicar ya que la entidad edil en primera instancia dio respuesta en su oportunidad a la solicitud de la administrada.

Que, bajo la premisa fáctica y jurídica expuesta estando a los fundamentos y consideraciones precedentes, a las Normas Invocadas, y con la atribuciones conferidas en la ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de la ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; **SOY DE OPINION:** Declarar la **INFUNDADO** el recurso de apelación presentado por la administrada **VICTORIA SALCEDO GONZALES**, contra la Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022, declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de aplicación del silencio administrativo negativo, consecuentemente **RATIFICAR** en todos sus extremos la Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022.

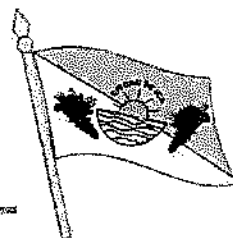
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación presentado por la administrada **VICTORIA SALCEDO GONZALES**, contra la Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022.

³ STC N° 1972-2007, del 08 de enero del 2007, caso Elek Karsay Rizsanyi, fundamento jurídico N°3 <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01972-2007-AA.pdf>.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR en todos sus extremos la Resolución de Gerencia de Administración N° 768-2022-GA-MPI, de fecha 08 de noviembre del 2022.

ARTÍCULO TERCERO: declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aplicación del silencio administrativo negativo.

ARTÍCULO TERCERO: DAR por agotada la vía administrativa, ello al amparo del artículo 50 de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación de la presente Resolución de alcaldía, conforme a Ley.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Ing. Carlos Humberto Reyes Roque
ALCALDE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Abog. Wilfredo Isaac Aquije Uchuya
C.A.I. N° 4259
SECRETARIO GENERAL

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA
RECEPCION
27 MAR. 2023
HORA: 12:30 FIRMA: 
Nº REG:
ANEXO FOLIOS: 3012

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA
PROVEIDO
27 MAR. 2023
PASE A Informática
PARA Publicación en la Pág.
Web

